

Frente a frente



Eolo Díaz-Tendero
Director ejecutivo de Horizonte Ciudadano

Expectativas

El gobierno del Presidente Boric llega al poder sobre una ola de grandes acontecimientos que sacudieron nuestro país como el estallido social de 2019 y la pandemia global de 2020. Viene empujado por una nueva generación en la política nacional marcada por su capacidad de movilizar al país (movimiento estudiantil de 2011) en una lógica que mostraba los atisbos de lo que se pensó ser un nuevo ciclo político, que se proyectaba marcado por la necesidad de reformas sistémicas y en temas centrales para la ciudadanía y que miraba críticamente lo realizado hasta ese momento por la elite gobernante. De algún modo el ciclo político sobre el que se monta la elección de 2021 hablaba de voluntad de empujar cambios en una nueva dirección no caminada hasta entonces y que se institucionalizaron en el proceso constituyente. Ya sabemos lo que pasó.

Uno de los desafíos más difíciles del oficio de la política es lograr transformar las expectativas y subjetividades que cristalizan en los procesos electorales en agenda política. Esto porque ya no basta solo con aunar voluntades y deseos, sino que requiere la fría pragmática de la adecuada evaluación de correlaciones de fuerza, de la minuciosa selección de canales de gestión apropiados para los objetivos trazados, del micro diseño de políticas públicas, de la constitución de alianzas estables y de un relato que cuaje en el sentido común ciudadano. En este camino, el gobierno saliente tuvo de dulce y de agraz.

De agraz porque, como en todos los gobiernos, en ese proceso se cometieron errores. Algunos estratégicos como las expectativas que se pusieron sobre el proceso constituyente, o cómo golpeó en el ethos de la nueva generación el así llamado caso fundaciones. Otros fueron de corte más táctico como por ejemplo el esquema de manejo de las crisis que cristalizó en el gobierno, que fue generando un desgaste del relato central, empujado además por una oposición obstruccionista y muchas veces vociferante que instaló el "contrarelato" de un país en crisis.

Dulce porque tuvo logros importantes que están impactando positivamente sobre la vida cotidiana de los chilenos. Sin duda las reformas en el ámbito del trabajo como las 40 horas, el aumento del salario mínimo y la reforma de pensiones se constituyen en el eje de un legado trascendente. También en el ámbito de cuidados están logros como el copago 0 (cero) en el sistema público de salud, la así llamada ley "papito corazón" o en ámbito de la normalización de una economía que recibió sobrecalentada, controlando la inflación y la reforma para la creación del *royalty* minero.

Por otra parte, en lo estrictamente político cabe señalar que se constituyó un gobierno amplio de los sectores progresistas y eso también es un logro. Si bien ha habido dificultades y evaluaciones encontradas sobre los efectos de esta alianza, el punto está en que se sitúa en la pragmática clara de que sin unidad de los sectores progresistas y de izquierda es imposible construir alternativas políticas viables que defiendan los derechos sociales.

Este juego clásico de la política es más complicado mientras más altas son las expectativas. Para la coalición saliente tuvo los efectos que hemos analizado, en lo que respecta al gobierno entrante cabe señalar que no escatimó atrevimiento en promesas muy precisas que la ciudadanía espera que cumpla.



María José Abud
Investigadora de Horizontal

El costo del desorden

El actual gobierno concluye en pocos días y su gestión puede evaluarse desde múltiples dimensiones. En materia de cumplimiento programático, el balance es claramente negativo, lo que para algunos constituye, paradójicamente, un gran éxito. El proyecto refundacional que prometió el Frente Amplio no prosperó, a lo que se suma la contundente derrota del texto constitucional que el propio gobierno respaldó en 2022. Sus principales logros, en cambio, se concentran en ámbitos ideológicamente distantes de sus promesas de campaña: más de 50 leyes aprobadas en materia de seguridad, la Ley de permisos sectoriales para agilizar la inversión y la reforma de pensiones, que terminó ratificando principios como el ahorro individual -pilar central del sistema- y el rol de los privados en su administración.

En estos cuatro años, y en ausencia de una crisis económica o social, la economía y las arcas fiscales se han debilitado de manera considerable. El crecimiento promedio anual fue de 1,9%, mientras que el mundo creció en torno al 2,9%. El mercado laboral se encuentra en peores condiciones que al inicio del mandato: el desempleo alcanza 8,3%, frente al 7,8% de entonces, y aún quedan más de 160 mil empleos por recuperar desde la pandemia. Las finanzas públicas se entregan en una situación crítica. Durante los últimos tres años no se cumplió la meta autoimpuesta de balance estructural y el 2025 cierra con una deuda pública de 41,7% del PIB, acercándose peligrosamente al umbral considerado prudente.

La superioridad ética con la que comenzó esta administración se desdibujó rápidamente ante escándalos como el del subsecretario Monsalve y el Caso Convenios. El primero socavó la promesa de un gobierno feminista; el segundo erosionó su credibilidad en probidad y transparencia, banderas en que habían prometido un nuevo estándar. A ello se suman otros hechos que reflejan mala gestión, falta de transparencia, improvisación y desprolijidad: la fallida compra de la casa de Allende, el erróneo cálculo de las tarifas eléctricas, la tardía reconstrucción tras el incendio de Valparaíso y el reciente caso del cable chino. Todos ellos han estado acompañados de explicaciones confusas e inconsistentes que evidencian una excesiva falta de rigor.

El efecto acumulado de estos sucesos, sumado al incumplimiento de la regla fiscal, es más profundo de lo que parece: constituyen un golpe severo a la credibilidad del país y a la solidez de nuestra democracia. Parte del legado que deja esta administración es la pérdida de reglas estables y de una ejecución estatal oportuna y transparente, traduciéndose en un deterioro de una institucionalidad que ha sido clave en el desarrollo económico y social de las últimas décadas.

Como advierten Acemoglu y Robinson, el progreso de los países depende de la solidez de sus instituciones, es decir, de la legitimidad de sus reglas y de su capacidad efectiva para generar igualdad de oportunidades. Cuando la institucionalidad se erosiona, su recomposición no es inmediata ni sencilla. El próximo gobierno, para poder avanzar en las emergencias económicas y de seguridad que se ha propuesto, enfrentará la compleja tarea de recuperar la credibilidad del país y restablecer un accionar estatal eficaz, sin improvisaciones ni desprolijidades.

¿Cuál es el balance que se hace de los cuatro años de gobierno del Presidente Boric?

A días de que se produzca el cambio de gobierno, los aciertos y errores como asimismo los factores que condicionaron el mandato del Presidente Gabriel Boric -quien llegó al poder con una propuesta de cambios relevantes-, son objeto del análisis de los especialistas.

